

EL COMPROMISO ANTI- INFLACIONARIO

La sociedad venezolana ha venido exigiendo a su gobierno una estrategia económica definida, viendo con sorpresa las dificultades para llegar a algún acuerdo fundamental incluso adentro del gabinete mismo. Pues bien, tras haber fracasado en concordar las opiniones de los diversos ministros de la economía entre sí y con los equipos del BCV y PDVSA, el gobierno propone la figura más amplia de un pacto que involucre a los principales actores económicos del país.

LA FIGURA ELEGIDA

La figura del pacto constituye una novedad relativa en comparación con el estilo de manejo de la política económica que el equipo de CAP esgrimió en el pasado reciente: allá un grupo compacto de convencidos pretendió imponer una línea a todo el país desde arriba; en el caso de ahora, la línea de arriba llama a un acuerdo entre las partes afectadas por las resoluciones que hayan de tomarse. Al elegir una figura de diálogo en vez de una de autoridad, se da un paso que puede resultar significativo para democratizar la gestión de la crisis. Más aún en un contexto en que decisiones de autoridad serían bienvenidas por una población cada vez menos democrática en sus actitudes, aunque lo sea todavía en sus convicciones.

La realización de la idea, sin embargo, bien poco se ha parecido a esta figura dialogal, al menos en principio. Primero las amenazas de chantaje con las divisas para quienes no quisieran plegarse al pacto; después los modos poco ortodoxos de establecer las comisiones que propondrán los términos concretos del acuerdo; por último —hasta el cierre de este número— el madrugonazo (¿frustrado?) del anuncio de devaluación y modificación del esquema cambiario, realizado unilateralmente por voceros de Hacienda en paralelo a una discusión que, según los términos del mismo compromiso, debe concluir dos semanas más tarde. Es decir, detrás de la figura dialogal, modos de hacer gubernamentales consistentes no en buscar consensos sino en exigirlos y hasta imponerlos, mientras el acuerdo entre los ministros sigue siendo débil, por decirlo suavemente.

LOS REPRESENTANTES

Como es lógico, en un compromiso de la magnitud del que se pretende, la representatividad real de los firmantes resultará fundamental cuando se trate de pasar de las buenas intenciones a acciones cuantificables. El comienzo de la declaración de intención firmada en Miraflores muestra cierta conciencia de que esto no puede darse por supuesto en

una situación como la nuestra, de tan baja articulación de la sociedad civil y últimamente del Estado. Resulta evidente que no podemos esperar a reconstituir ambos tejidos para abrir diálogo, sino que al revés, el hecho de que algunas decisiones se tomen dialogalmente puede constituir una ayuda inestimable para animar a otros grupos a organizarse y participar. El gobierno decide arar con los bueyes que tenemos, y hace bien en ello.

Sin embargo, llama la atención la exclusión de unos “bueyes” de primera importancia política: los gobiernos regionales y locales, donde se encuentra tal vez el vínculo democrático más vivo de nuestra sociedad en este momento. En la lógica del centralismo presidencialista que ha caracterizado lo que llevamos de periodo, los gobernadores y los alcaldes no firman el compromiso, ni se contemplan obligaciones para ellos, de tal manera que el pacto antiinflacionario (PA) carecerá de una articulación a nivel regional y local. Por supuesto, la política macroeconómica es asunto del gobierno nacional y del BCV principalmente, pero no tanto así la política cotidiana: en el diálogo con las cámaras y los sindicatos regionales cuando el pacto esté en marcha, el liderazgo de los gobernadores podría ser relevante. Al fin, también ellos estarán interesados en que disminuya la presión inflacionaria sobre sus poblaciones... ¿o no?

Este desconocimiento puede tal vez conectarse con la cercanía de las elecciones regionales y municipales, donde Convergencia se juega su futuro como partido. Dar relevancia desde el gobierno nacional a los gobernadores actuales iría contra los intereses del partido, que aspira a reemplazarlos con sus candidatos. Pero esto sería grave, si una cuestión de Estado de la trascendencia del PA estuviera siendo manipulada hasta el punto de la selección de los firmantes, por razón de intereses electorales. Y no vale el argumento de que, puesto que los gobernadores van a cambiar en diciembre, será con los nuevos con quienes habrá que concertar, porque todo el mundo sabe que

Raúl González Fabre

Al elegir una figura de diálogo se da un paso que puede resultar significativo para democratizar la gestión de la crisis

el pacto se juega su suerte en el primer trimestre después de su futura firma en términos concretos.

La segunda observación acerca de los firmantes ha de referirse a las organizaciones comunitarias: Ceconave (cooperativas), Fe y Alegría (educación popular), Rodep (ONG de economía popular) y Cesap (grupo social con actividades organizativas y formativas muy variadas). En la declaración de intención del PA se les pide básicamente su participación en la formulación y seguimiento de las concreciones del pacto, y su colaboración con las políticas sociales y de abastecimiento del gobierno, con acciones no gubernamentales concordantes. Se busca con ello crear un clima de paz social y disminuir las expectativas inflacionarias, objetivos importantes para el éxito del compromiso. Lo que puede esperarse de estas organizaciones, sin embargo, está limitado por su cobertura, corta si miramos al conjunto de la población popular del país, y por el hecho de que ya están ocupadas en sus actividades normales, que no pueden abandonar para dedicarse a cubrir las insuficiencias del Estado en política social y de abastecimiento.

Sin embargo, nos tememos que el papel que se esté requiriendo de ellas no se relacione tanto con acciones efectivas como con un apoyo simbólico al gobierno, que si el compromiso fracasa será fundamental para que la población lo interprete como falta del empresariado y los sindicatos, y no del gobierno. Algunas de estas organizaciones son conocidas por su cercanía a importantes funcionarios

Detrás del PA se encuentra el ala "política" del gobierno, que se expresa en una voluntad de diálogo para sumar voluntades. Falta el ala "económica", que se viene manifestando por una solución fiscalista. Desde el punto de vista económico, ambos enfoques resultan complementarios: reducir el déficit es parte esencial de lo que el gobierno debe hacer. Pero desde el punto de vista político puede resultar desastroso que haya dos líneas de trabajo.

Conviene dejar claro que las "organizaciones comunitarias" no representan a las comunidades populares ni a la Iglesia Católica

que están promoviendo el pacto. En la invitación a otras puede verse el deseo del gobierno de emplear la imagen de la Iglesia para dar credibilidad al pacto de manera indirecta a través de organizaciones dirigidas por clérigos, en vez de a través de la Conferencia Episcopal, que no aceptaría participar directamente. En todo caso, conviene dejar claro que estas organizaciones, que desarrollan loables iniciativas de variado género, no representan a las comunidades populares ni a la Iglesia Católica, y que deben evitar que se les enrede ante la opinión pública en una representación de la que carecen. Sería una manipulación lamentable.

Por último, es preciso hablar de la representatividad de los sindicatos y los gremios patronales. Los primeros, ya se sabe, compiten con los partidos políticos en el rechazo de la población, por la misma razón que su estructura interna les permite actuar desde una dirección centralizada desconsiderando a las bases. Este centralismo facilitará seguramente que lo firmado por la dirección de la CTV sea cumplido por la mayoría de los sindicatos.

Otro es el caso de las cámaras empresariales, que han ido al PA bajo amenaza. Mientras tal vez puedan hacer cumplir el compromiso a nivel de la gran y mediana industria, ello será imposible respecto a los pequeños industriales y comerciantes. Característico de estos es que cuando no están con el agua al cuello actúan como si lo estuvieran, previniendo oscilaciones futuras en su contra. Difícilmente modificarán su conducta por una firma del presidente de Fedecámaras, si no ven clara la estabilidad prometida, que en este momento dista de ser creíble. Creemos que en ellos se encuentra un importante factor desestabilizador para el PA, que el gobierno tratará de contrarrestar por la vía de las amenazas —IDEC, control de cambios y de precios, uso de la opinión pública, etc.—

VOLUNTAD Y VOLUNTADES

Detrás del PA se encuentran el ministro de Fomento, el de Trabajo y el ala "política" del gobierno. Han conseguido el apoyo del Presidente, lo que no es poco. De forma que tenemos una cierta voluntad política operando tras el pacto. Pero



Si el Presidente cree en el acuerdo, debe conseguir unidad en su gabinete

como esa voluntad no se presenta de manera autoritaria sino dialogal, requiere sumar más voluntades para tener éxito. Creemos que el trabajo está a medio hacer para este momento, pese a la espectacular firma de la declaración de intención en Miraflores.

En primer lugar, falta el ala “económica” del gobierno, ministerios de Hacienda, Cordiplan, FIV, Seniat, y tal vez el BCV, fuera del gobierno... que se vienen manifestando por una solución fiscalista a la crisis inflacionaria, esto es, por la vía unilateral de la reducción del déficit elevando los impuestos y/o recortando los gastos, aunque esto último resulta en realidad más difícil. Desde el punto de vista económico, ambos enfoques resultan complementarios: reducir el déficit es parte esencial de lo que el gobierno debe hacer. Pero desde el punto de vista político puede resultar desastroso que haya dos líneas de trabajo simultáneas en el gabinete, con sus correspondientes declaraciones paralelas a la prensa: los que creen en el PA y piensan que la política económica debe discutirse en la mesa del pacto, y los que no creen y toman decisiones desde el solo gobierno. Si el Presidente cree en el acuerdo, debe conseguir unidad en su gabinete.

Las voluntades de la CTV y de las “organizaciones comunitarias” parecen estar ganadas para la idea, pero claramente no es así con los empresarios (que controlan además los medios de comunicación). El discurso del Presidente en la firma de la declaración de intención, fundado sobre la idea de que todos deben convencerse de que no tienen más salida que jugar su juego, reflejó bien la actitud del gobierno al respecto: a los empresarios se les trae bajo cierta coacción. Habrá grandes tensiones por ello, que de momento se resuelven en un silencio prudente, pero que a la larga pueden dar al traste con el acuerdo, tan pronto como encuentren excusas en incumplimientos del gobierno.

Este tiene a su disposición, sin embargo, una excelente herramienta para ganar la voluntad del empresariado: poner

su propia voluntad en la reforma del sistema de prestaciones y seguridad social. Si el Presidente se arriesga ante la opinión pública a hacerlo, los empresarios sentirán que se les ofrece algo importante, y le harán algunas concesiones reales de buena gana. Posiblemente lo mismo ocurra si el gobierno consigue manejar el déficit, pero esto es en verdad más difícil en términos tanto económicos como políticos.

Por último hay que mencionar a la población común, que no se siente representada en el acuerdo más que de manera difusa por el Presidente —por eso su firma era tan importante—. El confuso proceder en torno al bono que acompañó la propuesta del PA, ha hecho a la gente perder la poca confianza restante en el gabinete económico. De manera que la población debe ser contada en este momento entre los escépticos, con un escepticismo que puede reaccionar en cualquier dirección si no se empiezan a ver resultados. Los medios de comunicación, por su parte, serán esenciales al principio respecto a lo que se ve o no, pero a plazo de meses, la población medirá el éxito del pacto en el abasto donde compra. Al firmar el PA, el Presidente ha arriesgado sin duda parte de su caudal político, lo que va a tener importantes consecuencias políticas si el pacto falla.

SI EL PACTO FALLA...

El buen éxito del PA depende en gran medida de la acción real del gobierno sobre el déficit. El valor del pacto se encuentra en que las consecuencias contractivas de la estabilización se repartirán mejor que en un plan realizado desde el solo gobierno. Los empresarios tomarán una parte de la carga, que no caerá entera sobre los trabajadores, y el sector formal del trabajo tomará otra parte, que no caerá así tanto sobre el sector informal y los desempleados. Por eso el pacto puede ser llamado “un compromiso de solidaridad”.

En el texto del compromiso, además, se incluyen aspectos no inmediatamente vinculados al déficit, como el menciona-

Si el pacto fracasa, hay peligro de un nuevo deslizamiento hacia el autoritarismo

do del régimen laboral y el saneamiento de la banca. En estas líneas puede haber avances aunque el objetivo antiinflacionario no se alcanzara. Por eso nos encontramos ante algo más que un compromiso de estabilización: hay importantes elementos de reforma estructural de la economía comprometidos.

Pero el éxito del PA se medirá por los índices de inflación. ¿Qué ocurre si el “compromiso de solidaridad” al respecto no funciona, por ejemplo, por razón de que el déficit real es mayor de lo que el gobierno pensaba? Con parte del prestigio político del Presidente comprometido, no será fácil dar el capítulo por cerrado sólo con unas destituciones. Lo primero que alcanzamos a imaginar son acusaciones mutuas entre el sector empresarial y el gobierno. El primero tal vez sostenga que el gobierno creó condiciones imposibles para los empresarios; el segundo acusará a los empresarios de especulación. Aun con el peso de los medios de comunicación del lado empresarial, creemos que la población estará más dispuesta a prestar oídos al gobierno, dentro de la previsible confusión.

El resultado político de un proceso así sería un nuevo deslizamiento hacia el autoritarismo, con la población pidiendo más controles y mano dura. Por tanto, un retroceso en el diálogo sobre la política económica que, deficiente y todo, supone la figura del pacto. Si el PA funciona, como deseamos, se irán sumando voluntades y habremos avanzado mucho en cuanto sociedad participativa. Pero si no lo hace, será imprescindible sostener a toda costa la voluntad de diálogo subyacente, para que cada cual ofrezca a la opinión pública una explicación veraz y humilde de sus limitaciones. Aun si el pacto fracasara, puede resultar una oportunidad de maduración democrática para nuestra sociedad. Sin embargo, tememos que los actores comprometidos preferirán en ese caso descargar culpas sobre otros aunque con ello aumente la desorientación de nuestro pueblo. □

Raúl González F. es miembro del Centro Gumilla